

INTRODUCCIÓN

«Vengo a votar por los incapaces para evitar lo peor», así respondía a pie de urna un votante anónimo francés al reportero que le entrevistaba en las elecciones legislativas del verano de 2024. Las encuestas pronosticaban la mayoría absoluta de la ultraderecha. Pocos meses después el «Partido de la Libertad», fundado por exoficiales nazis, ganaba en Austria. En febrero de 2025, el nacional-populismo de Alternativa por Alemania duplicaba el número de votos para situarse como primer partido de la oposición. El pueblo llano evitó «lo peor» en Francia para desplazar dos años el problema, hasta las siguientes elecciones. No sabemos si en Alemania resistirá mucho tiempo o se romperá el cordón de seguridad de los moderados para evitar la entrada de su democracia en el corredor de la muerte.

De manera casi simultánea, en los Estados Unidos el electorado no concedió a los perdedores del partido demócrata los cuatro años de gracia que suplicaban. El segundo mandato nacional-populista anuncia un crudo invierno que nos lleva directamente a la dimensión desconocida. Pero el atrabiliario presidente tampoco es la causa del mal, sólo es una de sus consecuencias. Viene a sustituir a los mediocres que le han abierto las puertas de par en par. En las frágiles democracias de nuestro tiempo el voto-resignado va claudicando ante el voto-protesta e incluso anti-sistema de las opciones más extremistas. Anuncia, más que lo peor, lo pésimo; y así, de un desangelado y fastidioso espectáculo, vamos pasando sin apenas transición al teatro del absurdo. En este caso concreto, del liderazgo mediocre al lunático que, por idéntico vicio de origen, es igual de incompetente.

A efectos de este libro entre las reformas de la nueva administración estadounidense interesa el nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental. En principio, se propone mejorar el servicio público aplicando las tijeras o la sierra mecánica, con preferencia al destornillador o la regla de cálculo. Puede tratarse de un simple ajuste financiero en el marco más amplio de una campaña de intimidación del personal; pero al respecto cabe puntualizar que, aparte del posible apoyo a algunas intervenciones en una burocracia desmedida, aquí el blanco se sitúa muy por encima del simple funcionario,

que se limita a cumplir lo que le ordenan. Tampoco se dirige el tiro al capataz que coordina su labor. Ni siquiera a la mayor parte de los directivos que organizan el trabajo de ambos. Aunque a veces se cuestionan algunos aspectos de su desempeño, en especial cuando se ejerce en contacto directo con los miembros de la llamada clase o casta política. El ensayo se centra, ante todo, en los políticos profesionales situados en el escalón superior y en su demostrada incapacidad para resolver los problemas de la mayor parte de la población en las sociedades económicamente desarrolladas.

Entre las causas de la victoria del autoritarismo neo-reaccionario en EE.UU. hay una que puede parecer secundaria, pero que constituye precisamente una parte esencial de esta obra. En algunos momentos de la campaña electoral los ganadores han propuesto al electorado la aplicación de principios de eficiencia empresarial al gobierno de lo público. A la espera de si el remedio es efectivo o si resulta peor que la enfermedad, bueno es reparar en esta, digamos, «fruslería» del buen liderazgo directivo y de la mejor gestión posible en política. Cuestión que, por cierto, no parecía ni parece preocupar demasiado a los perdedores... Pero, en este punto necesito reclamar, por favor, un momento de atención sobre este problema que a buen seguro en los próximos años va a influir no poco en el debate público. La batalla no ha de darse totalmente por perdida para los defensores a ultranza de la democracia liberal, puesto que, como intento demostrar, esta trinchera en concreto no está completamente abandonada.

Estamos viviendo en una de las épocas más oscuras para la democracia. El cansancio ciudadano expresado en las urnas es sólo un síntoma de la enfermedad en nuestro sistema de gobierno. El creciente desprestigio de la política es su principal causa y se evidencia, salvo en raras excepciones, con la caída constante de participación en los comicios. También se debe a un hecho inquietante en la mayoría de las democracias: los líderes, elegidos en elecciones libres y fiables, suelen gobernar con apenas el respaldo de una cuarta parte de la población adulta. Esta desestabilización de la democracia se manifiesta en diversos ámbitos de la vida cívica y social, pero *el gobierno mediocre* es la causa primera de su actual debilitamiento.

La decadencia de la democracia liberal anuncia incluso su muerte, toda vez que va transmutando en diversas perversiones adoptadas al socaire de las autocracias que la amenazan, como son las democracias i-liberales o tuteladas y, desde hace poco, las libertarias, que mejor cabría calificar de anarcocapitalistas. De manera que, con todas las precauciones posibles, puede afirmarse que el sistema democrático-liberal de gobierno *no es sostenible tal como está constituido y en la manera cómo funciona*. La prueba la

tenemos en la gran cantidad de errores que cometen los administradores públicos que elegimos. Nos están abocando a un caos sin precedentes.

Semejante al del animal herido acechado por las hienas en medio de la sabana, va extinguiéndose el hálito vital de la anciana democracia. A la vez que, ante nuestra observación impotente, un cáncer en estado avanzado la va corroyendo por dentro. Dejo para el final de la exposición las implicaciones éticas y morales del problema. El primer agente patógeno que señalo con preferencia es la mediocridad y la incompetencia de la mayor parte de los políticos profesionales que la manejan. La segunda causa de la enfermedad radica en el envejecimiento e inoperancia de algunas de sus instituciones básicas. Más que sobre el cómo o el por qué, expongo a continuación algunas consideraciones sobre *quién* ejerce el poder en el sistema democrático de gobierno. Junto a una reflexión en profundidad sobre la señera institución del Senado. *Per se*, pero de manera especial en relación a las clases medias, la parte más significativa y determinante del cuerpo electoral.

Por supuesto, al hombre medio, que sostiene sobre sus hombros al sistema de gobierno más civilizado que se conoce, le dedico varios capítulos. En especial intento explicar la estupefacción que produce en la ciudadanía el hecho de entregar de manera sistemática la administración de una parte considerable de su bolsa y de su vida a profesionales que ningún empresario mínimamente solvente contrataría para llevar sus negocios. Elección tras elección este tipo de gestores públicos, impuestos por el filtro interno de los partidos políticos (organizaciones imprescindibles para el sistema, aunque para nada altruistas), ocupan de manera directa o indirecta los tres poderes del estado democrático.

En esta curiosa «empresa» llamada Estado es asombrosa la dejadez y negligencia de la masa de accionistas o ciudadanos, incluso de los más cultos e independientes. Es ciertamente singular, porque estos mismos particulares, por ejemplo, antes de tenderse en un quirófano, comprar un automóvil o redactar un documento legal se asesoran con especialistas preparados. En cambio, para dirigir los asuntos públicos han adquirido la perniciosa costumbre de ponerse en manos de indocumentados, de ineptos e incluso de algunos pillastres de las tipologías más variadas. No es tarea sencilla comprender y explicar esta sinrazón colectiva. En consecuencia, me avanzo a pedir disculpas por los errores de interpretación en los que pueda caer. Tan sólo aspiro a que, entre todos los cartuchos empleados, alguno impulse la bala que dé en el blanco.

Cuando en la enfermedad acudimos al médico es porque le suponemos con la formación científica y la práctica clínica necesarias para hacer el

diagnóstico y prescribir un tratamiento. Lo mismo sucede con cualquier otro profesional del que tenemos necesidad. Pero en el gobierno de la cosa pública ocurre algo muy chocante y cada vez más grave a medida que el mal avanza. Cuando el ciudadano medio contrata a quienes han de administrar esta parte de sus legítimos intereses, un espeso velo colocado de manera sistemática ante sus ojos le impide contemplar la realidad más elemental. Una tela de araña mediática, tejida por numerosos comunicadores incapaces o simplemente vendidos, impide evaluar la escasa, a menudo escasísima, capacitación de los políticos que se le proponen, para legislar, para gobernar e incluso (en las democracias incompletas, poco evolucionadas o torcidas) para seleccionar a quienes han de aplicar la ley en los tribunales.

Es en extremo alarmante el poder —democrático, por supuesto— que han ido acumulando tales intermediarios institucionales, esa verdadera «oligarquía interpuesta» que constituyen los partidos políticos, establecidos entre las tradicionales oligarquías económicas y el pueblo soberano. Con disimulación o con desparpajo, dependiendo del grado de madurez de cada sociedad, acaban imponiendo con machacona regularidad al elector verdaderos amateurs que consiguen cobrar de la bolsa pública como profesionales. Aunque casi nunca puedan acreditar ni conocimientos ni experiencia para resolver asuntos complejos, que requieren formación experta, visión, energía, tenacidad y capacidad resolutive.

Se trata de un arcano insondable, de una devastadora enfermedad psíquica incrustada en el inconsciente colectivo que contribuye a la degradación de instituciones políticas que en su esencia son democráticas, aunque a veces puedan partir de cuerpos sociales o nacionales un tanto primitivos o averiados. Aunque la misma insania en diverso grado empieza a manifestarse también en sociedades más avanzadas y dotadas, en principio, de una mejor complexión moral. Desde el mismo inicio de la etapa concurrencial que son los comicios, se manifiesta esa permanente dejadez o extraña locura que parece instalada en el comportamiento colectivo del animal social humano. Invariablemente se activan los mismos perversos mecanismos psíquicos y comunicativos por parte de los que en la penumbra mueven los hilos del pensamiento público y manejan las emociones más primarias de la masa. Para explicar este curioso fenómeno masoquista quizás algún día dispongamos de una nueva ciencia: la psiquiatría política. Por el momento, en tal dolencia colectiva sólo está a nuestro alcance describir una parte de la etiología y proponer posibles tratamientos que al menos ayuden a atenuar los síntomas más graves.

Otro misterio inexplicable, que con toda modestia se intenta aclarar en las líneas que siguen, puede formularse de la siguiente manera: ¿Por qué

el poder democrático o mesocrático no puede empoderar a un consultor externo para evitar el naufragio de su empresa, en este caso de la República o el Estado? No hay que pedirle al pueblo soberano la entrega de la propiedad y ni siquiera de la gestión de sus activos y pasivos. Sólo se le aconseja que, como cualquier individuo o empresa privada en dificultades, se asesore de manera conveniente. Antes de que patosos sin conocimientos ni experiencia hurguen en sus entrañas, vendedores desaprensivos le endilguen chatarra repintada a precio de coche nuevo o que picapleitos desmañados le hagan firmar incluso su propia sentencia de muerte.

1. El fracaso de las clases medias

Según un renombrado entomólogo norteamericano especialista en hormigas «tenemos tecnologías de dioses, instituciones de la edad media y emociones de la edad de piedra». Hasta hoy estamos sobreviviendo de milagro a la combinación de la primera y la tercera característica, lo que es motivo de sesudas cavilaciones de biólogos y filósofos. En este libro se aborda la segunda, por si es posible preservar, hasta etapas más avanzadas de desarrollo de nuestra especie, el que sin duda es el menos malo de los sistemas políticos conocidos.

En las colmenas humanas de los países con economías desarrolladas predomina la forma de gobierno llamada democracia. Como es sabido, nace en la «polis» ateniense, pervive con el reconocimiento de los derechos de la plebe en la república romana, se prolonga en parte a través de pintorescas manifestaciones en algunos burgos medievales europeos y en la Edad Moderna se instaure, de manera revolucionaria, en su forma actual. Sus principios esenciales se fijan por escrito a finales del siglo XVII en Inglaterra y un siglo después en los Estados Unidos de América y en Francia. A partir de ellos, durante el siglo XIX de la historia occidental, la burguesía triunfante establece instituciones de gobierno que se han mantenido prácticamente intactas hasta nuestros días.

Hoy puede afirmarse que es la llamada clase media la que administra este patrimonio político. Por lo que las democracias liberales consolidadas son, en el fondo, verdaderas *mesocracias*. A partir de mediados del siglo XX, con la aceleración del desarrollo económico y el acceso masivo a la educación superior de gran parte de sus miembros, esta parte de la población obtiene una indiscutible preeminencia social. Al menos en la mayoría de países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Una situación económica todavía bastante

independiente permite a la clase media hacer frente a la clase superior u oligarquía tradicional mientras que, de manera natural y cotidiana, ejerce una gran influencia sobre los grupos o estratos sociales inferiores. Es previsible que esta preponderancia política vaya disminuyendo a medida que avance nuestro siglo. Algunos sociólogos incluso anuncian su desaparición, en consonancia con el profundo y acelerado adelgazamiento económico de las clases medias en el que están inmersas las sociedades más desarrolladas.

A no dudarlo, las instituciones políticas por las que nos regimos en la actualidad no son medievales; aunque sí vetustas. La clase social burguesa que las creó las ha transmitido, de manera pacífica (con la condición de mantener su influencia en los gobiernos), a este nuevo poder popular que, con algunos retoques de fachada, las mantiene *casi idénticas a como eran hace más de dos siglos*. Tan sólo han cambiado sus integrantes. Es éste el caso de los senados, en los que a mediados del siglo XIX predominaban los potentados y aristócratas, mientras que a partir del siguiente son amplia mayoría los profesionales de la política o, para ser más precisos, los gobernantes impuestos por los partidos políticos. Como he avanzado, a esta clase o clases medias dominantes en la política de las mesocracias occidentales dedico una parte considerable del texto. A la vez que, de manera muy especial, propongo dirigir la atención del lector hacia la reforma de la señera institución del Senado.

La ancianidad y en ocasiones incluso decrepitud de algunas instituciones democráticas se manifiesta en un tiempo en que la tecnología de las comunicaciones ha acelerado, hasta límites inimaginables el intercambio económico, la dinámica social y la interacción política. No es normal que, superadas con creces más de dos centurias de regímenes formalmente democráticos, las instituciones políticas no se hayan adaptado aún a los nuevos electores que en teoría son sus propietarios. De manera muy concreta a esta clase o clases medias, que conforman en nuestro tiempo una verdadera «élite social mesocrática», usufructuaria de la mayor parte del poder político, al menos del público o manifiesto. Tan cierto como que el día sucede a la noche es que la democracia liberal no puede subsistir sin el apoyo y la implicación de esta amplia base social situada entre la oligarquía poseedora y la masa desposeída. Ni podrá tampoco sin ella nacer y crecer la institución de un nuevo senado, como el que aquí se preconiza, *basado en el mérito profesional contrastado de sus integrantes*.

Es igualmente cierto que la democracia pertenece a todos los ciudadanos y no es propiedad de ninguno en particular. Como todo bien mostrenco, permanece a disposición de todos y a la vez de nadie. Pero si hay un sector social que puede adjudicarse de manera legítima el título de propietario, o

al menos el de principal usufructuario es, reitero, esa digamos virtuosa clase media. Además, por su peso demográfico actúa como el colchón más efectivo para amortiguar los golpes que suelen propinarse entre sí los estratos sociales más desfavorecidos y la minoría siempre acaparadora. Es también una obviedad que cuando en cualquier formación social esta clase adelgaza, se encoge o incluso desaparece irrumpen la involución política o la revolución social. En consecuencia, todo intento de mejora en la calidad del sistema como el que aquí se propone, si no quiere verse reducido a una mera disquisición teórica, debe contar con la aquiescencia y el concurso de los elementos más conscientes de esa clase social intermedia.

La dura realidad es que la medianía social todavía imperante comprueba a diario cómo una parte creciente de sus miembros va engrosando las filas del precariado. Y así, mientras se extiende entre sus integrantes el miedo a un futuro incierto, va ensanchándose de manera alarmante la fosa que separa a la minoría de los cada vez más ricos de los que nada o apenas nada poseen, excepto su fuerza de trabajo. Un trabajo, encima, progresivamente devaluado con respecto al capital propietario de las máquinas y de los sistemas de control para hacerlas funcionar. Es por lo demás un hecho demostrado que, hace ya medio siglo, una considerable proporción de las clases medias experimenta una merma progresiva en su renta económica y, en consecuencia, en su posición social. Este retroceso se ha acelerado en la primera década de la centuria y con más determinación si cabe en la segunda. El dominio de toda clase de dispositivos electrónicos y sus múltiples conexiones digitales está dejando a la mayoría social mesocrática a merced de una ínfima minoría. Con lo que se refuerza la dinámica perversa en el reparto de beneficios económicos y, en consecuencia, de influencia social y política.

De manera que el debilitamiento progresivo de la base social sobre la que se sustenta la democracia coincide en el tiempo y va paralela a una considerable pérdida en el valor de cambio del trabajo aportado por la mayor parte de sus miembros. A su vez el asalto digital a la intimidad, en paralelo al desarrollo tecnológico en casi todas las profesiones, influye de manera avasalladora en el conjunto de la sociedad. Con lo que el imparable desarrollo de la Inteligencia Artificial aplicada a la selección en el mercado laboral seguramente ensanchará el foso, hasta hacerlo infranqueable, al menos para los estratos inferiores de las clases medias.

Es un hecho evidente que la propia dinámica del sistema económico (incluso contando con la intervención moderadora del poder del Estado en las democracias más avanzadas) propicia el acaparamiento capitalista de los mejores talentos directivos y los más destacados cerebros científicos. Así que, mientras aumenta el valor del capital propietario de las máquinas

y la tecnología y disminuye el valor del trabajo, incluso del trabajo especializado, los integrantes más perspicaces de la clase media empiezan incluso a percibirse como «no necesarios» para el sistema económico. También a medida que se vuelve más predecible, repetitivo y sustituible por la IA, disminuye el valor de mercado de una parte considerable del trabajo intelectual hasta hace poco considerado como relevante. En consecuencia, entre sus integrantes empieza a dominar una angustiosa percepción: los grandes avances de nuestro tiempo, e incluso el saber acumulado en épocas anteriores, pueden volverse en su contra.

Simple y llanamente su existencia social y técnico-económica dentro del sistema de producción capitalista (el único homologable a día de hoy, al menos en cuanto a eficiencia y eficacia productivas) empieza a ser *prescindible*. Excepto, claro está, en el caso de la selección entre sus filas de una exigua minoría de supertecnólogos, capaces de diseñar y hacer funcionar la cada vez más sofisticada maquinaria.

La evidencia de su progresiva marginación económica y social es la constatación del fracaso político de la democracia. Por eso el mal económico, agravado por el acelerado desarrollo tecnológico que aqueja a la parte media de la sociedad, ya no admite demoras en el tratamiento. Es conocido y celebrado el reconocimiento del maestro de inversores Warren Buffet al afirmar que su secretaria paga más impuestos que él. Es de agradecer su valor cívico y, sobre todo, su honestidad intelectual. Algo parecido hay en la petición a los gobernantes y a la opinión pública de pagar más impuestos por parte de algunos supermillonarios (norteamericanos en su mayoría). ¿Entonces qué ocurre? Simple y llanamente que, para revertir la situación, la que denomino «oligarquía interpuesta», la clase o casta política que gobierna en las democracias, *es simplemente incapaz* de imponerse a los grandes dirigentes empresariales que gestionan las economías privadas. No ya solamente en el aspecto político de la cuestión, sino ni tan siquiera desde el punto de vista meramente técnico-profesional o administrativo.

En una palabra, el edificio democrático se ha construido con algunos materiales defectuosos que es urgente sustituir. En la obra destaco otros graves defectos estructurales. Parece que me ensaño con los albañiles llamados a repararlos, pero no es así puesto que el mal viene de arriba. Y también de lejos en el tiempo. Para explicarlo, establezco a menudo el paralelismo entre los felices años veinte del siglo pasado y los que estamos «disfrutando» en el presente. Cien años es tiempo más que suficiente para sacar conclusiones. Tanto por parte de los Altos, como los denominaba Orwell en su célebre novela anticipatoria, como por los representantes de los Bajos.

Y, por supuesto, por los Medios, a los que, como he anunciado, dedico una parte considerable de las páginas que siguen.

De todo lo anterior se deduce una conclusión bastante sencilla, aunque me apresuro a destacar que los que viven y medran alrededor del poder político se esforzarán en negarla. No comprenderán ni se dedicarán a hacer comprender a la mayor parte de sus votantes que su labor debe ser inspeccionada, controlada y fiscalizada por *senados meritocráticos*, libres, independientes y soberanos, integrados en su mayor parte por los mejores talentos directivos disponibles en cada sociedad, es decir, por la *inteligencia práctica* más que por la teórica. Con lo que la competición entre el interés público y el legítimo interés privado podría quedar equilibrada. Sólo mediante este *win-win* directivo y gerencial privado-público o público-privado podrán preservarse los intereses de las capas medias de la población. Y, por tanto, del conjunto del pueblo soberano, a la vez que los del mismo sistema liberal-democrático de gobierno.

Avanzo en estas líneas introductorias una terminología que utilizo a lo largo del texto: los senados en las democracias avanzadas deben ser *meritocráticos*, no *partitocráticos*. Y remarco que su nacimiento y desarrollo se sustenta en la misma esencia de la democracia. Con esto me adelanto a cualquier deducción sesgada de mi planteamiento, a partir de un posible apriorismo sectario desde el pensamiento político de la izquierda. No se trata del «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Por las razones que iré exponiendo, nada tiene que ver la tesis central de este ensayo con la conocida máxima del despotismo ilustrado. Entre otras consideraciones porque por primera vez en la historia la tecnología y la educación generalizada permiten de manera sencilla y natural una nueva, intensa e instantánea interacción política entre las minorías gobernantes y las masas gobernadas.

2. La amenaza del populismo y las autocracias

En la parte del hormiguero humano que llamamos Occidente las clases medias suelen fiar su suerte en política al albur de elecciones periódicas controladas muy de cerca por los partidos políticos, la mayoría democráticos, principales usufructuarios y grandes beneficiarios del sistema. Ahí se origina con frecuencia el uso en su contra del poder público. Apenas disponemos de explicaciones serias a esta paradoja en la que la clase social vertebradora de las mesocracias se debate a diario. Es un caso singularísimo éste del que teniendo el poder acaba permitiendo que se ejerza en contra de sus intereses. O no sabe utilizarlo para contrarrestar otros intereses que le son claramente adversos,

situados casi siempre por arriba y a veces incluso también por debajo en la pirámide social. Tal anomalía no debe atribuirse a la tolerancia, a la transacción o al politiquero habituales sino a la incapacidad de los líderes elegidos a través del filtro oligárquico impuesto por las nomenklaturas de los partidos.

Aparte del conservadurismo natural en todo tipo de instituciones (que, en palabras del historiador Jaume Vicens Vives, «por el simple hecho de encajar una tensión vital o reproducir un equilibrio de fuerzas, nacen, si no muertas, al menos estáticas»), una explicación a la pervivencia de esa actitud está en que nuestras democracias han acabado degenerando en descarnadas *partitocracias*. La mayoría de ellas impiden toda reforma en profundidad de las instituciones, promueven y mantienen gobiernos ineficientes e ineficaces en los estados democráticos y, lo que es más grave, contribuyen a la perpetuación en la mente pública de la muy perniciosa creencia de que la mediocridad es algo consubstancial al sistema liberal-democrático de gobierno.

Entre los ciudadanos de democracias posteriores a las implantadas en Europa nada más finalizar la Segunda Guerra Mundial, como es el caso en mi entorno catalán y español, incluso antes de su instauración se tenía por inevitable que el sistema podía ser más bien aburrido, pero sorprende hoy comprobarlo tan inoperante y carente de horizontes. Ni en la peor pesadilla podíamos imaginar la extrema fragilidad de la democracia en su etapa actual. Hay además otro factor determinante a considerar respecto al núcleo de este libro y que en gran parte explica la motivación de su contenido. El caso español, en su gobierno central y en los de sus nacionalidades y regiones autónomas, constituye una oportunidad impagable para argumentar una crítica sin fisuras a los y las que con su incompetencia profesional y personal contribuyen al desprestigio de la política y a la degradación de la institucionalidad democrática. La continua manifestación pública de tanta estulticia y dejadez constituye, sin embargo, una afortunada circunstancia para el objetivo primordial de no desviarme ni lo más mínimo en la denuncia que merecen tantos profesionales de la política que no están a la altura de sus responsabilidades.

La joven democracia española se dispone a celebrar su primer cincuentenario. Sin apenas violencia se culminó la transición, ejemplar en algunos aspectos, de la autocracia franquista a la democracia liberal. A grandes rasgos, la primera década se caracterizó por la participación en política de personas con carreras profesionales desarrolladas en la sociedad civil, es decir, con retribuciones al margen de la política. En el ya largo periodo siguiente, nos han gobernado profesionales en su mayor parte germinados y crecidos al amparo del calorillo reconfortante del invernadero que es el

partido político. La previsión, al menos para el futuro inmediato, no es para nada optimista. Con toda probabilidad, irá empeorando la calidad directiva y gerencial de los profesionales de la política. Al menos entre las nuevas cohortes provenientes del ámbito universitario, entre las que la masificación suele traer consigo una vulgarización en los contenidos y el descenso en el nivel de exigencia académica. Si a ello añadimos la escasa o nula capacidad de la sociedad y del sistema económico para proporcionar una mínima experiencia laboral a la gran mayoría de jóvenes en los inicios de su formación práctica, el porvenir es francamente desalentador.

Por contra, en el ámbito hispánico, al menos entre los electores pertenecientes a generaciones más veteranas, puede darse una ventaja de cara a la comprensión de la democracia como método de gobierno. En el contexto en el que escribo, a diferencia de la clase media crecida y educada en democracias señeras o más consolidadas, los *baby boomers* no estamos sometidos a prejuicios inconscientes o condicionados por alguna sacralización del sistema. Ni siquiera por referentes de liderazgo o institucionales susceptibles de apaciguar nuestra indignación como ciudadanos. En este sentido, al menos en relación a los formados y crecidos en democracias antiguas, gozamos de una plena independencia mental y afectiva. Esto facilita un análisis imparcial y desapasionado, tanto de los métodos o formas del sistema como de su contenido y resultados. Aunque, precisamente por haber carecido de su amparo y disfrute durante una parte de nuestra vida, nos sentimos más obligados a su defensa, tampoco nos sentimos en exceso condicionados cuando es preciso enjuiciarla y denunciar sin tapujos a sus principales representantes (por supuesto, legítimos).

De modo que hemos entrado hace tiempo en un círculo vicioso en el que la muy baja calidad profesional, técnico-gestora, cultural y a veces incluso humana de los profesionales de la política imposibilita la mejora real de la democracia por medio únicamente del sistema de partidos. Parece también evidente que toda propuesta de mejora en la calidad política debe centrarse en las personas concretas que se proponen para ocupar los cargos públicos. Así, la crítica a la partidocracia imperante debe ser, pues, en esencia una crítica *ad personam*, y de esta premisa parte el objetivo principal del libro. En consecuencia, puesto que el instrumento esencial en la política democrática, y el principal responsable de la idoneidad de sus dirigentes, es el *partido político*, le dedico de manera preferente **la parte I** del libro. En ella repaso los principios fundamentales que conforman la práctica interna y externa

de estos intermediarios cualificados en democracia, situados entre el poder público y el pueblo que delega su soberanía en ellos o, para ser más precisos, en las personas que en el interior de sus organizaciones ellos eligen para presentar a los comicios.

La explicación politológica puede parecer suficiente, pero antes que la política en sí opera un mecanismo psicológico colectivo de gran perversidad, y esto ocurre desde el momento en que la democracia se asentó y consolidó como sistema de gobierno en los países más avanzados de Occidente. Con lo que, a estas alturas de los tiempos, ya parece más que oportuno preguntarse por qué en las mesocracias actuales la política no atrae al talento, al menos al talento directivo. ¿Cabe acaso pensar que nos aqueja una especie de masoquismo colectivo? De ser así, se trata de una grave enfermedad, de una especie de pecado original de la democracia que nadie sabe por qué motivo, desde finales del siglo XVIII y principios del XIX, se va transmitiendo de generación en generación. En las democracias antiguas es, si cabe, más perniciosa la dolencia puesto que desde su nacimiento parece haberse aceptado como algo casi consustancial al sistema. Se sobreentiende que el político puede ser un inútil, un ignorante e incluso un sinvergüenza siempre que no interfiera demasiado en los asuntos privados, en especial en los de carácter económico; y que, por supuesto, «le caiga bien» a la masa de electores. De más está decir que me cuestiono este desvarío y buena parte del ensayo es un alegato contra tal perversión.

Por desgracia, el negocio de la política suele interesar demasiado a indocumentados, desesperados y aventureros de todo pelaje y condición. Es una obviedad y poco se puede argumentar en contra del derecho que les ampara. Por su parte, la persona capaz que ingresa en política suele verse desbordada por engranajes de rivalidades profundas, de odios incluso viscerales entre personas de escaso fuste moral y encima con la insana tendencia a no respetar la palabra dada. En el caso de tener posibilidades reales de gobierno, su aspiración para cambiar aspectos relevantes en la sociedad suele reducirse a un máximo de 4-5 años, prorrogables de manera directa o indirecta a través de sus colaboradores más fieles, en una especie de bucle sin fin de campañas electorales permanentes. Apenas queda tiempo para reconducir un presupuesto público, heredado o no de la administración anterior, e ir preparando para los próximos ejercicios otro u otros para legar en buenas condiciones a quién ocupe después el cargo.

Tampoco suelen recibir el reconocimiento público y el trato económico que merecen los profesionales que pueden acreditar solvencia y experiencia en la dirección y gestión de organizaciones complejas. No se retribuye adecuadamente la inteligencia, habilidad interpersonal, empatía con la gente y

una capacidad de liderazgo que se proyecte en los colaboradores próximos y en el conjunto de la organización para sacar lo mejor de cada uno de sus integrantes. Por el contrario, es costumbre inveterada tratarlos con cicatería, tanto en la renta percibida como en el reconocimiento moral por sus servicios. Así el profesional excelente dedicado a la administración de lo público comprueba que no se acerca, ni remotamente, a lo que recibe el *manager* bien pagado, que en la empresa privada dedica sus esfuerzos a incrementar las plusvalías de los propietarios o accionistas.

En casi todos los países la realidad es la misma y va empeorando por diversas causas bien conocidas que intento resaltar. Tan sólo avanzo ahora que el sistema democrático se ha ido conformando a lo largo del tiempo contando únicamente con el control de los partidos políticos que lo administran, sobre una opinión pública fuertemente intervenida por poderosos intereses, a través de cada vez más sofisticados medios de influencia. Nunca se ha provisto al sistema de un organismo independiente, integrado por los mejores profesionales de la gestión y por los emprendedores, gestores, científicos y personalidades creadoras que han destacado en las vertientes más exigentes del conocimiento y de la práctica directiva. Como he avanzado, a este órgano colegiado de personas competentes, al que podemos llamar senado o consejo, se refieren algunas de las principales aportaciones del libro.

Me avanzo también a resaltar una idea primordial que voy exponiendo a lo largo de la obra: sin el concurso de la parte más cívica y consciente de las clases medias, una asamblea como la que se propone no es viable e incluso ni siquiera es imaginable. De ahí el protagonismo y la presencia que en numerosos pasajes esta nueva institución comparte con la clase media, a la que destaco como «élite social mesocrática». Parece evidente que a esta clase de tropa (reconozco que el término no es muy fino) tendrá que recurrir la nueva institución meritocrática si, de veras, se quiere enderezar, entre otras cosas, el rumbo de la institución clave en toda democracia que es el partido político.

Con pesadumbre, remarco en numerosas ocasiones la dejación sistemática de la vigilancia cívica y política que le concierne a la clase media como clase social hegemónica en las sociedades avanzadas, al encomendarse de manera inconsciente a gestores que sabe incompetentes y a menudo incluso desleales. Sin embargo, no debe engañarnos el elevado número de integrantes de la clase dominante mesocrática sobre su poder real y capacidad de influencia. Como tampoco cabe admitir la excusa que suelen argumentar muchos de sus miembros ante la fuerza y capacidad de influencia de los de arriba o los periódicos estallidos de malhumor de los estratos sociales que tienen por debajo.

Suele darse un curioso mecanismo psicológico entre los integrantes de esta parte de la población tan determinante en la democracia. Como individuos se sienten capacitados para al menos comprender los hechos, en cambio, en su función social de ciudadanos y ciudadanas comunes, suelen evadirse de sus responsabilidades con suma facilidad. Muchas personas piensan que ya se encauzarán los problemas mediante las decisiones que tomen los gobernantes y, si no es así, cuentan con las correcciones inducidas por las protestas concretas en momentos determinados por parte de los más desfavorecidos. Se trata de la dicotomía permanente entre el individuo que somos y el ser social que condiciona nuestros más íntimos pensamientos y acciones. Un cotidiano desgarramiento interior del ser humano en las sociedades abiertas sobre el que abundo también en algunos pasajes de la obra.

Dedico con preferencia **la II parte** a la política y la clase política del país elegido para ejemplificar el conjunto de las aproximadamente 38 mesocracias que existen en el mundo, entre los países integrados en la OCDE. Algunas imperfectas o poco consolidadas, pero las únicas existentes entre los 193 países inscritos en la ONU. La mayoría están asentadas sobre un considerable nivel educativo de la población, o al menos con titulaciones universitarias en un elevado porcentaje de sus clases medias.

A estas alturas de los tiempos parece que en las mesocracias ya no debería ser tan sencillo manipular a una ciudadanía con estudios superiores o una posición social basada en una mínima independencia económica. En la historia de la humanidad nunca antes en tantos países tantas personas han disfrutado de un grado de instrucción y de un nivel de vida lo bastante holgado como para permitirles dedicar una parte de su tiempo a la acción cívica. Más aún cuando, en las dos primeras décadas de nuestro siglo, se ha generalizado la interconexión ciudadana a través de internet. Con lo que, gracias a la tecnología, por primera vez en la historia es posible poner en contacto permanente a las personas más concienciadas de la —aún poderosa— clase media con todo tipo de organizaciones, como pueden ser en el futuro las asambleas meritocráticas. De momento, el nuevo medio permite esta comunicación sin apenas intermediarios, al menos conocidos.

Con sólo estos datos podríamos albergar un razonable optimismo sobre el futuro del sistema democrático. Pero, aunque tampoco abonen una actitud pesimista, mucho me temo que el triunfalismo no es la opción más prudente. Con independencia del tipo de estudios o conocimientos adquiridos, es fácil constatar en buena parte de la masa universitaria un gran desconocimiento en aspectos básicos de las ciencias del hombre y de la sociedad. Estamos ante un tipo de personas que, en el terreno intelectual y político, debido a los prejuicios que todos cargamos en el zurrón, por el

simple hecho de pertenecer a cualquier tipo de agrupación humana, suelen hacerse trampas a sí mismas cuando juegan al solitario. También es un hecho probado que incluso en el interior de los propios partidos políticos la parte más consciente de sus afiliados no puede imponer por sí misma a sus oligarquías internas un mínimo criterio de calidad entre los candidatos a ocupar el poder. Precisamente, para satisfacer esta necesidad primigenia de selección del personal que se dedica a la política es imprescindible disponer de un arbitraje externo, experto e imparcial.

Conectadas de manera permanente al nuevo Gran Hermano que nos vigila, miles de millones de personas abatimos la frente, segundo a segundo, ante el canal de comunicación que va desplazando a todos las demás. Sin embargo, internet, por las razones que aduzco en **la III parte**, puede convertirse en una gran oportunidad para la renovación de las mesocracias y de su sistema de gobierno, preservando los valores primigenios de la democracia.

Pero, por mucho interés y buena voluntad que de manera individual o colectiva pongan en el empeño los miembros de la clase hegemónica en política, o los principales «accionistas» de la organización o empresa conocida como Estado democrático, les será imposible controlar el funcionamiento de los diversos consejos de administración o de gobierno que lo componen. Sin el concurso de un experimentado auditor externo, no pueden por sí mismos fiscalizar la actividad diaria ni valorar su planificación estratégica. Para garantizar la salud de la democracia, expongo cómo esta masa social preponderante necesita librarse de trasnochados corsés que pertenecen a otras épocas y que encima ni siquiera sirven para estilizar una figura ya entradita en años.

Por el contrario, ha de ser capaz de dotarse de instituciones nuevas que defiendan de veras sus principales intereses y los del conjunto del pueblo soberano. La principal consiste en *un órgano colegiado constituido por las mejores cabezas y trayectorias profesionales que cada sociedad sea capaz de generar*. Sin unos nuevos senados basados en el mérito, constituidos por las minorías que más han destacado en la gestión exitosa de las organizaciones y proyectos más complejos, me temo que no es posible el control ni el aseguramiento de la calidad en los profesionales de la política que en las democracias facultamos para acceder al poder público.

Son, pues, diversas las causas que explican la falta de vigor político de la clase social predominante en las democracias, y que favorecen la sumisión a intereses a-sociales e incluso a veces claramente anti-sociales. Tanto es así que la apelación insidiosa por parte del nacional-populismo o matonismo político a adoptar posturas radicales se dirige a estas clases medias, en especial a los sectores en proceso de desclasamiento. Y, por descontado,

a los estratos inferiores de la población. La provocación habitual no iría más allá de los vaivenes normales de la política partidista, pero su acción permanente amenaza incluso con derrocar al mismo sistema democrático de gobierno.

Los síntomas de la enfermedad son alarmantes y la época de las mesocracias surgidas en sociedades abiertas, mediante la aplicación a la política de los principios inspirados en el humanismo liberal, puede estar llegando a su fin. Todo parece indicar que en el partido que estamos jugando contra la autocracia estamos entrando en tiempo de descuento y, si no queremos perderlo, son necesarias propuestas innovadoras e incluso disruptivas. No tenemos otra alternativa que desarrollar la salida meritocrática en las repúblicas avanzadas, recurriendo a la aristocracia del saber y de la máxima solvencia profesional, que nada tiene que ver con la del dinero o de la estirpe familiar. Es necesario plantear seriamente que las personas que destacan en la creación y administración de la riqueza privada (y, en consecuencia, también de manera indirecta de la pública), en estrecho contacto con los más destacados representantes de la ciencia, el conocimiento, la espiritualidad y el desarrollo humano en sus más altas facetas, sean capaces de organizarse en consejos o senados, para examinar y vigilar hasta dónde sea posible la selección de las personas que aspiran a dirigir las instancias más relevantes del poder público.

A no dudarlo, el perfeccionamiento del sistema político requiere la implantación en nuestras mesocracias de una «segunda legitimidad democrática», surgida entre los mejores profesionales, en su mayoría provenientes de las clases medias. Reconozco que desde el punto de vista jurídico no es fácil encajar las dos legitimidades en las máximas promulgadas por los grandes autores del derecho constitucional. Por este motivo la destaco ya al final del texto, proponiendo su reflexión a personas más preparadas. Como es obvio, remarco en su momento que la parte más sustanciosa de su legitimidad moral radica en un componente claramente *meritocrático*, es decir, en puridad «no democrático». Pero no tenemos más remedio que avanzar en esta dirección si no queremos que el progreso del gobierno popular quede estancado o persista en la involución en la que hoy se debate.

Hay pocos textos en los que apoyarse para desarrollar el núcleo teórico de una propuesta de este alcance. Como consecuencia de ello, añado un apéndice para comentar algunos de los autores que me han ayudado a armar ideológicamente la propuesta. Intento también en este apartado resumir las principales concepciones sobre las élites en la filosofía política contemporánea, añadiendo al análisis politológico principios y conceptos del *management* o dirección empresarial. Junto a una reflexión sobre la

destacada presencia en la gestión tanto privada como pública del estamento directivo, que hoy constituye una parte considerable de las élites o superélites, nacionales y globales.

A modo de conclusión del introito tan sólo me cabe pedir la indulgencia de los lectores más críticos. Según afirmaba Charles Maurice de Talleyrand, exobispo católico, reciclado en ministro de la Francia revolucionaria y repescado después para la restauración de la monarquía, «al hombre le fue dada la palabra para enmascarar su pensamiento». Y acaso —añado por mi parte— disponemos de la escritura para disimular nuestra ignorancia. Por ello confío en que los expertos en las diversas áreas de conocimiento de las que me sirvo para ordenar el discurso que sigue sabrán disculpar mis carencias; además de alguna intromisión acaso inmoderada. También en la generosidad del lector avisado y perspicaz al valorar mi atrevimiento.

3. Terminología empleada

—Llamo *superélite* o *superélite económica* a la formada por los miembros de la clase social «superior» u oligárquica. A menudo cuenta con el servicio y la connivencia de grupos selectos de la clase media-alta, que de esta manera suelen integrarse en ella.

—Puesto que parece ir en aumento la tendencia natural de los integrantes de la peculiar clase social dirigente, mesocrática, de nuestro tiempo a sustraerse a la participación política e incluso a los mínimos deberes ciudadanos, me parece necesario insistir en el recuerdo de sus obligaciones. Por esta razón a lo largo de la obra vuelvo a ella en numerosas ocasiones y la destaco entre las grandes fuerzas que mueven los resortes colectivos en las sociedades regidas por el sistema liberal-democrático. De esta manera reservo el término de élite social a esta *clase dominante o hegemónica* en las mesocracias, intermedia o situada entre las verdaderas élites dirigentes, surgidas de las clases sociales más elevadas, y las clases populares o «bajas».

Aun a sabiendas de que la palabra francesa *élite* designa a una minoría selecta o rectora, no encuentro mejor manera de expresarlo que mediante la figura retórica del oxímoron, uniendo dos términos tan opuestos. Su comprensión lógica se facilita con el añadido del adjetivo relacional: «élite social mesocrática». Aunque a menudo me refiero a ella más específicamente como clase social «dominante» o «hegemónica» en política. Pero, puesto que en los países desarrollados una parte tan considerable de la población está integrada por esta clase media, o en su mayor parte media-baja si se quiere, siento que en algunos pasajes de la obra debo transigir con la lógica

y forzar el lenguaje para resaltar la idea-fuerza que subyace en una parte muy considerable de mi argumentación.

De manera especial en este amplio sector social, no sólo en los asuntos personales sino también en los públicos, cada cual es el verdadero responsable de los bienes o males colectivos. En una democracia liberal me parece evidente que, en última instancia (y de momento), está en las manos de la ciudadanía media el poder político real. Otra cosa es si, como queda expuesto, acierta o no en la elección de los intermediarios que pueden asegurarle el éxito en el gobierno de lo público. Siguiendo esta misma línea de argumentación, huyo por sistema de las teorías de la conspiración, puesto que la peor de todas las conspiraciones es la que se hace contra sí misma la clase media, que mueve la voluntad del soberano popular o la mayor parte de ella en toda democracia formal. Por esta razón, como queda dicho, le dedico tanto espacio como a la nueva institución del senado meritocrático.

—De esta poderosa evidencia viene la adjetivación de la siguiente categoría de actores en el drama democrático, que a veces suele manifestarse incluso como comedia. El poder político va oscilando y cambiando de manos conforme a la capacidad económico-social y la influencia cultural-comunicativa de los grupos humanos que lo ejercen. En este aspecto destaco el concepto de *oligarquía interpuesta*: con este término denomino a la llamada clase política, situada (por obra y gracia de la institución del partido político, imprescindible por lo demás en toda democracia) entre el elector soberano y la oligarquía tradicional o superélite económica.

El poder político democrático acostumbra a ejercerse mediante el desempeño inepto o mediocre de la comúnmente llamada clase o casta política. Con frecuencia, en contra de los intereses legítimos de la parte media del pueblo soberano. El resultado final es de sobras conocido: en la actual sociedad líquida de consumo el poder «blando», y por esencia disperso, de las clases medias es con frecuencia desbordado por el poder «duro», concentrado, de la superélite. Ésta, como es sabido, acaba controlando a través de personas interpuestas una parte considerable de los resortes del poder político, mediante la presión directa sobre sus principales actores o la indirecta de los principales medios de comunicación e influencia social.

—Finalmente, utilizo con frecuencia el término *liderazgo*. Soy consciente de que en los estudios empresariales desde la última década del siglo pasado es habitual separar este concepto del de gerencia o jefatura. Al líder se le considera como el «bueno», el inspirador, el compañero de viaje; mientras que el jefe es el «malo», el controlador o represor de los subordinados. En las páginas que siguen prescindo de esta distinción. De igual manera amalgamo adrede las actividades diferentes que expresan los verbos

«dirigir» y «gestionar». Aunque a veces —según el contexto de la exposición— también los separo, tiendo a pensar que el directivo o ejecutivo excelente ha de estar bregado en ambas facetas. En consecuencia, para no complicar la exposición y la lectura, unifico las diversas visiones poliédricas del *management* en el mismo término de «liderazgo». En él incluyo la capacidad directiva e ideológica junto a la gerencial o práctica.